



## Asamblea General

Distr. general  
29 de febrero de 2012  
Español  
Original: inglés

---

**Consejo de Derechos Humanos  
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre  
la Detención Arbitraria en su 61º período de sesiones  
(29 de agosto a 2 de septiembre de 2011)**

**Nº 50/2011 (Egipto)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 23 de junio de 2011**

**Relativa a: Maikel Nabil Sanad**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años más en su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

3. Maikel Nabil Sanad, nacido en 1985, reside normalmente en El Cairo y es un *bloguero*.

4. El Sr. Sanad es conocido en Egipto por haber anunciado en su *blog* que se negaría a cumplir el servicio militar obligatorio en el ejército egipcio. Recientemente criticó al ejército en una serie de artículos, una publicación en su *blog* titulada "The Army and people wasn't ever one hand", así como varias publicaciones en su página de Facebook. Ha denunciado los abusos cometidos por agentes de las fuerzas militares durante las protestas y la dirección de esas fuerzas tras la caída del régimen del Presidente Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011. En varias ocasiones, el Sr. Sanad ha interpuesto formalmente denuncias penales; la última de ellas de fecha 22 de febrero de 2011 (inscrita con el N° 2068-2011) por haber sido golpeado brutalmente por los militares.

5. El 28 de marzo de 2011, el Sr. Sanad fue detenido en su domicilio. Fue acusado de "insultar a las fuerzas armadas" con arreglo al artículo 184 del Código Penal de Egipto y de "difundir información falsa" con arreglo al artículo 102 del Código Penal de Egipto.

6. El Sr. Sanad fue trasladado al Tribunal Militar Superior, que celebró su primera audiencia el 30 de marzo de 2011. El 6 de abril de 2011, un juez militar anunció que dictaría sentencia el 10 de abril de 2011. La fuente informa de que el 10 de abril de 2011 se negó a los abogados del Sr. Sanad el acceso a la sesión del Tribunal y se les informó de que la sesión se había cancelado y que no habría veredicto. Sin embargo, a la mañana siguiente, el 11 de abril de 2011, los abogados del Sr. Sanad se enteraron por el expediente oficial de que había sido condenado por el Tribunal Militar Superior a una pena de tres años de prisión y una multa.

7. En primer lugar, la fuente afirma que la detención del Sr. Sanad no tiene fundamento jurídico alguno y que por ello es arbitraria. En su calidad de civil, el Sr. Sanad tuvo que comparecer ante un tribunal militar con arreglo al Decreto de 11 de mayo de 2011, por el cual se renovaban por dos años más las leyes de emergencia, vigentes desde 1981. De acuerdo con la información recibida de la fuente, ese decreto limita el alcance de la aplicación de las leyes de emergencia a la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas. Dado que los cargos que se le imputan al Sr. Sanad no se encuadran en esas categorías, la fuente considera que el tribunal militar carecía de jurisdicción para juzgarlo en primer lugar. Además, aunque el artículo 6 del Código de Justicia Militar establece la posibilidad de deferir al juez militar el caso de un civil, esa facultad está sujeta expresamente a una decisión presidencial, de la cual, según la fuente, no se disponía en este caso. La fuente concluye que la privación de libertad del Sr. Sanad contraviene lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución de Egipto.

8. En segundo lugar, la fuente afirma que la privación de libertad del Sr. Sanad es una consecuencia directa del ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y expresión. Según

la fuente, el hecho de que el Sr. Sanad mantuviera un *blog* en Internet, en el que trataba distintos temas relativos a Egipto y otros países, es la única razón de su detención y encarcelamiento por los militares. Por lo tanto, la fuente sostiene que su detención es arbitraria porque viola el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular el derecho del Sr. Sanad a expresar pacíficamente sus opiniones políticas.

9. En tercer lugar, la fuente sostiene que el encarcelamiento del Sr. Sanad contraviene lo dispuesto en el artículo 9, párrafos 1 y 4 del Pacto. Según se informa, el Sr. Sanad ha sido privado de su libertad sin el derecho de recurrir la sentencia dictada en su contra y sin ninguna posibilidad de impugnar la legalidad de su detención y encarcelamiento. Es en este sentido que la fuente considera que el encarcelamiento del Sr. Sanad no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto, que garantiza que "toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley".

10. De acuerdo con la fuente, el Sr. Sanad no se benefició de las garantías mínimas que contempla el derecho a un juicio imparcial. En el contexto del procedimiento militar expeditivo, a los abogados del Sr. Sanad no solo se les negó la posibilidad de hacer valer sus derechos ante el Tribunal Militar Superior sino también la posibilidad de asistir a la sesión celebrada el 10 de abril de 2011 durante la cual el Sr. Sanad fue condenado. A la luz de lo que antecede, la violación de las garantías a un juicio imparcial de que ha sido objeto el Sr. Sanad es de una gravedad tal que constituye una privación arbitraria de su libertad.

11. De acuerdo con la información recibida, el Sr. Sanad se encuentra actualmente privado de libertad en la prisión de Tora de El Cairo.

#### *Respuesta del Gobierno*

12. El Grupo de Trabajo transmitió la comunicación al Gobierno el 23 de junio de 2011 y lamenta que el Gobierno no haya proporcionado la información solicitada. El 16 de agosto de 2011, el Grupo de Trabajo recibió del Gobierno de Egipto la solicitud de prórroga, por un mes, del plazo para presentar una respuesta. El Gobierno señaló que el objetivo de la prórroga solicitada era presentar una respuesta exhaustiva que tuviera en cuenta los recientes acontecimientos del caso mencionado. El Grupo de Trabajo no considera que las razones demostradas por el Gobierno sean suficientes para justificar la prórroga, en particular teniendo en cuenta otros hechos relacionados con ese caso, por ejemplo, el hecho de que el Sr. Sanad haya estado en huelga de hambre prolongada en protesta por su encarcelamiento y por la sentencia dictada por un tribunal militar.

#### **Deliberaciones**

13. De acuerdo con sus métodos de trabajo revisados, el Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una opinión en este caso sobre la base de la información que ha recibido.

14. La cuestión esencial en el presente caso radica en la competencia, la legalidad y la independencia del tribunal militar en lo que se refiere al Sr. Sanad, un civil, *bloguero*, que ha expresado públicamente sus opiniones. En su jurisprudencia uniforme, el Grupo de Trabajo ha determinado que el uso de tribunales militares en esos casos constituye una violación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (véase por ejemplo, la Opinión N° 27/2008).

15. En su Observación general N° 32 (2007) sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, el Comité de Derechos Humanos reafirmó que las disposiciones del artículo 14 se aplicaban a los tribunales ordinarios y especiales, civiles o militares (párr. 22). El Comité también señaló que el enjuiciamiento de civiles por

tribunales militares o especiales podía plantear problemas graves en cuanto a que la administración de justicia fuera equitativa, imparcial e independiente. El Comité insistió en que el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares debía ser excepcional, es decir, limitarse a los casos en que el Estado parte pudiera demostrar que el recurso a dichos tribunales era necesario y estaba justificado por motivos objetivos y serios, y que, por la categoría específica de los individuos y las infracciones de que se trataba, los tribunales civiles no estaban en condiciones de llevar adelante esos procesos.

16. El Grupo de Trabajo señala que los procedimientos de los tribunales militares o especiales a menudo son irregulares. Además del hecho de que el acusado desconoce la identidad y la condición de los presidentes de tribunales, existen otras irregularidades en esos juicios, como la exclusión de los abogados, los familiares y el público. Otras irregularidades comunes consisten en restricciones con respecto a la comunicación con el abogado, la preparación de la defensa, la citación y el interrogatorio de testigos.

17. Las denuncias formuladas en este caso son suficientes para demostrar la gravedad de la violación de las salvaguardias mencionadas en la Observación general N° 32. De hecho, el Sr. Sanad es un civil y no hay elementos que puedan demostrar la necesidad absoluta de un juicio militar. El Sr. Sanad no se benefició de las condiciones de detención que le hubiesen permitido consultar con un abogado y poder preparar una defensa adecuada, lo cual constituye una violación del artículo 14, párrafo 3 b) y d). La sentencia dictada por el tribunal militar no puede recurrirse, lo cual también atenta contra los derechos que asisten al Sr. Sanad en virtud de artículo 14, párrafo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el Sr. Sanad fue privado de su derecho a hacer interrogar a testigos y a obtener su comparecencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3 e) del Pacto. A la luz de esas circunstancias, el Grupo de Trabajo sostiene que la privación de libertad del Sr. Sanad es arbitraria por cuanto el juicio imparcial y las graves violaciones de las garantías procesales mínimas corresponden a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

18. Por último, el Grupo de Trabajo no ha determinado hechos específicos que puedan justificar el encarcelamiento del Sr. Sanad. La única explicación razonable es que el encarcelamiento del Sr. Sanad se debe a sus críticas de los militares y la policía del país. Recientemente había criticado al ejército en una serie de artículos disponibles en Internet. Sus quejas a la policía y a las fuerzas de seguridad con respecto a los actos de violencia pública en su contra han sido inútiles. De ello se concluye que la privación de libertad del Sr. Sanad también es arbitraria, ya que corresponde a la categoría II de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

### **Decisión**

19. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Maikel Nabil Sanad es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

20. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, lo que incluiría poner en libertad de inmediato al Sr. Sanad y concederle una reparación adecuada.

[Aprobada el 2 de septiembre de 2011.]